

RESUMEN

La prueba, “la demostración de un hecho del cual se deriva el derecho que se pretende, no constituye propiamente una obligación sino una **necesidad práctica**, una carga, un peso”¹; carga que se traduce en la situación en la que se halla una persona (el litigante o interesado) que sostiene un hecho o reclama un derecho, debiendo probar la existencia del uno o del otro, es decir, la existencia del fundamento de su pretensión.

Teniendo claro que la carga de la prueba es la oportunidad probatoria otorgada a las partes para satisfacer la convicción del juez respecto de sus afirmaciones, debemos enfocarnos en la importancia que dicha situación tiene en nuestra legislación; iniciando por señalar que la base jurídica sobre la que la legislación ecuatoriana fundamenta tanto la definición como el alcance de la carga de la prueba u *onus probandi*, se halla prevista en la Sección 7° del Título I, Libro II del Código de Procedimiento Civil.

La normativa establecida por el artículo 113 del Código de Procedimiento Civil en la que se señala que “es obligación del actor probar los hechos que ha propuesto afirmativamente en el juicio, y que ha negado el reo”; así como aquella del artículo 114 *ibídem* que determina que “cada parte está obligada a probar los hechos que alega, excepto los que se presumen conforme a la ley”; son reglas del legislador que más bien se han transformado en principios a los que podríamos calificar de generales, ya que la gran mayoría de legislaciones comparten y defienden el mismo parecer.

Tomando en cuenta lo trascendental que resulta ser la distribución del *onus probandi* no sólo durante la etapa probatoria, sino a lo largo del proceso, y en especial al momento de dictarse una sentencia, es posible sostener que la normativa con la que cuentan nuestros jueces no logra satisfacer las necesidades legales que continuamente surgen en esta fase.

¹ ALESSANDRI R., Arturo, SOMARRIVA U., Manuel, VODANOVIC H., Antonio, “Tratado de Derecho Civil: Partes Preliminar y General”, Tomo II, 6ta edición, Editorial Jurídica de Chile, 1998, pág. 420.

Por ende, la problemática a tratarse se centra en que el tema del *onus probandi* no se halla debidamente descrito y detallado en nuestra legislación; en otras palabras, la gran cantidad de situaciones que pueden producirse en esta fundamental etapa no cuentan con un respaldo o una descripción en un código específico, motivo por el que han sido los tratadistas y la doctrina los encargados de explorar, investigar y en definitiva, regir al campo del *onus probandi* a través de sus aportes.

No por esto queremos decir que las contribuciones doctrinarias sean insuficientes, al contrario, es gracias a estos aportes que nuestros jueces logran sustentar sus criterios al momento de distribuir el *onus probandi* cuando las pruebas aportadas por las partes no alcanzan su pleno convencimiento.

De tal manera queda claro que lo que se pretende es la inclusión y debida regulación del tema de la carga de la prueba supeditado a un proceso oral estrechamente vinculado con nuevas corrientes doctrinarias que faciliten la apreciación y entendimiento del significado del *onus probandi*; la realización de una normativa completa que proteja los intereses de las partes y que facilite y promueva la intervención del juez a lo largo de toda la fase probatoria.

Antes de adentrarnos en el análisis de la problemática planteada, es necesario acotar definiciones más completas de la mencionada carga de la prueba, así como centrarnos en sus antecedentes, evolución y diversas acepciones doctrinarias.

Iniciaré mencionando que la frase carga de la prueba tiene sus orígenes en la expresión latina *onus probandi*, principio jurídico que desde su temprana aplicación señalaba quién tenía la obligación de probar un determinado hecho ante los tribunales.

El fundamento del *onus probandi* radica en un antiguo aforismo del derecho que expresa que lo normal se presume, lo anormal debe probarse; y de acuerdo con esta apreciación, quien alegaba algo que alterara el estado de normalidad y continuidad debía cargar con el peso de demostrarlo, sujetándose claramente al principio *affirmanti incumbit probatio*, es decir, a quien afirma incumbe la prueba.

Constituía un principio invariable el que las partes tienen la carga de aportar la prueba de sus afirmaciones o, en caso contrario, soportar las consecuencias de omitir ese imperativo del propio interés. Con estos antecedentes es lógico concluir que durante mucho tiempo la carga de la prueba se caracterizó por ser un principio pacífico en materia procesal.

Es gracias a la evolución doctrinal y al desarrollo de nuevas teorías superadoras de los principios tradicionales que el *onus probandi* se convierte en la necesidad de probar para vencer. Vale la pena mencionar que, toda vez que el proceso se halla regido por el principio dispositivo, la actividad de las partes, así como su nivel de participación, resultan sumamente importantes para la suerte de sus pretensiones o defensas al considerar que toda la iniciativa probatoria radica en la intervención de las partes procesales.

Las principales características atribuidas a esta distribución de la obligación de probar son:

Es parte esencial de la teoría general de la aplicación del derecho ya que “faculta al juez con el poder de decidir sobre la actuación del derecho sustancial al surgir insuficiencia probatoria”².

Es una regla general para toda clase de procesos, ya sea que se rijan por el principio dispositivo o por el inquisitivo.

Su contenido versa sobre dos puntos claves, primero, en la regla que permite que el juez decida y regule la falta de prueba o certeza sobre los hechos y, segundo, en la distribución de la carga probatoria en busca de la oportunidad de exposición y defensa de las partes.

No se limita a determinar quién debe soportar la prueba, sino a quién le ha de corresponder el riesgo y el perjuicio de que no se la practique con la debida oportunidad.

Su influencia es tal que su adecuado o inapropiado manejo se aprecia de forma evidente a lo largo de todo el proceso, principalmente, en el momento en el que el juez emite su fallo

² ROSEMBERG, Leo, “La Carga de la Prueba”, Ed. Egea, Buenos Aires, 1956. pág. 11.

“porque su fin primordial es permitirle al juez resolver sobre la litis cuando la prueba no otorga la necesaria certeza”³.

Ahora si es posible afirmar que la carga procesal debe entenderse en primer lugar, “como una situación jurídica instituida en la Ley que consiste en el requerimiento de una conducta de realización facultativa, normalmente establecida en interés del propio sujeto, y cuya omisión trae aparejada una consecuencia perjudicial para él”⁴; y, excepcionalmente, como la potestad y deber del juez para esclarecer oficiosamente la realidad fáctica en litigio, para garantizar de esa manera que sus decisiones de fondo sean adoptadas en forma justa; resultando así que la labor del juez no puede limitarse a la simple aplicación de leyes ante un material probatorio carente de sustento, sin posibilidad alguna de buscar formas alternativas, contempladas en la Ley, que lo provean de pruebas oportunas para adquirir el grado de convicción necesario para resolver el litigio.

En conclusión, la carga de la prueba es, en otras palabras, la obligación que tienen los actores procesales para que, a lo largo del juicio, el juez se nutra de elementos que lo lleven a formar su convicción.

Una vez que hemos ahondado en la evolución doctrinal del *onus probandi*, debemos situarnos en el marco legal que la legislación ecuatoriana le brinda a la distribución de la carga procesal, es posible afirmar que son tres los principios que nuestra legislación ha adoptado de la doctrina general, principios, vale la pena decir, en torno a los que gira la actividad probatoria de las partes, estos son:

ONUS PROBANDI INCUMBIT ACTORI

Principio que sostiene que al demandante le incumbe el deber de probar los hechos en los que funda su acción; esto concuerda perfectamente con lo señalado por el artículo 113 del Código de Procedimiento Civil al sostener que “es obligación del actor probar los hechos

³ CABRERA ACOSTA, Benigno Humberto, “Teoría General del Proceso y de la Prueba”, obra citada, pág. 370.

⁴ COUTURE, Eduardo, “Estudios de Derecho Procesal Civil”, Edit. Ediar, Buenos Aires, 1948-1950, págs. 208 y 209.

que ha propuesto afirmativamente en el juicio...”; quedando claro así que la actuación del actor o demandante dentro del proceso constituye el primer peldaño que da inicio a la etapa probatoria toda vez que sus afirmaciones son el instrumento en el que tanto él como el resto de partes procesales basarán sus excepciones, futuras pruebas y resoluciones.

REUS, IN EXCIPIENDO, FIT ACTOR

Principio que establece que el momento en el que el demandado se excepciona o se defiende, se convierte en demandante al tener que probar los hechos, afirmaciones o negaciones en los que fundamenta su defensa; principio que claramente coincide con lo dispuesto por el artículo 114 del cuerpo legal citado, norma que determina que “cada parte está obligada a probar los hechos que alega...”; y también con el artículo 113 toda vez que se establece que “el reo deberá probar su negativa si contiene afirmación implícita o explícita sobre el hecho, el derecho o la calidad de la cosa litigada”.

ACTORE NON PROBANTE, REUS ABSOLVITUR

De acuerdo a este principio, el demandado será absuelto de los cargos o de la acción del demandante si éste no logra probar los hechos constitutivos de su demanda. El artículo 113 contempla la posibilidad de que “el demandado no estará obligado a producir pruebas en caso de que su contestación sea simple o absolutamente negativa”, de darse esta circunstancia, la carga probatoria recaerá única y exclusivamente sobre el demandante, quien, de no poder proporcionar oportunamente las pruebas suficientes y necesarias para el pleno convencimiento del juez, sufrirá las consecuencias pertinentes de una demanda sin fundamentos.

La mayoría de autores tradicionales defienden, casi de forma unánime, el precepto normativo de que la carga de la prueba es una situación jurídica que versa esencialmente sobre las partes, lo cual resulta bastante lógico dado que tanto la legislación nacional como el principio dispositivo y el de inmediación así lo determinan, siendo las partes aquellas obligadas a solicitar, practicar y evacuar los medios de prueba pertinentes que permitan dar al juez una base razonable para emitir su decisión final.

El esfuerzo que las partes realizan con la presentación de la prueba tiende a producir en el juez la convicción de la verdad de sus afirmaciones, y por su parte el juez va adquiriendo el conocimiento de los hechos a medida que aquéllas aportan su prueba. “Es así que de un primer estado de ignorancia que supone la ausencia absoluta de conocimiento, el juez alcanzará un grado de certidumbre respecto a los hechos afirmados por las partes a través de los medios probatorios que se vayan produciendo hasta alcanzar un grado de convicción necesario para fundar su sentencia”⁵.

En definitiva, no podemos hablar de un dueño absoluto o de un personaje principal en el evento de la distribución de la carga de la prueba, y menos aún podemos excluir al rol del juez ni restarle importancia a su labor cuando en realidad es él quien maneja, distribuye, valora y resuelve las aportaciones probatorias recibidas.

Tampoco podemos hablar propiamente de una carga probatoria del juez, dado que su carga trasciende los parámetros del proceso y se extiende hacia un deber público y social, pero sí podemos hablar de una responsabilidad probatoria, de una ampliación en las facultades participativas del juez a lo largo del proceso sometido a su resolución, que cada vez se ve más respaldada por el apoyo de nuevas corrientes doctrinarias y de aportes normativos que promueven la continua y personalísima actuación del juez dentro de este tan importante momento procesal.

Concordando con la opinión de Bonet Navarro, “no puede dejarse la suerte de que se desarrolle la actividad probatoria, sólo dependiendo de una petición concreta de puro carácter formulatorio”⁶. Sin desviarnos del tema, resulta necesario precisar una de las tantas desventajas del sistema escrito que aún empleamos; el hecho de que aún prevalezca y peor aún, se exija la presentación de escritos para llevar adelante la resolución de la causa, es uno más de los ejemplos de por qué nuestro sistema judicial carece de economía procesal y celeridad.

De acuerdo a la Ley de Enjuiciamiento Civil española, la iniciación de la actividad probatoria no precisa de una petición concreta de las partes, ni por lo tanto, de una

⁵ CABRERA ACOSTA, Benigno, obra citada, págs. 349-350.

⁶ NAVARRO, Bonet, “Consideraciones sobre la Fase de Prueba de los Procesos Civiles, en el Anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Civil”, Ed. Ponencias, Murcia, 1997, pág. 234.

resolución del Tribunal en que se otorgue la causa a prueba. Dicho avance procesal se aprecia en el artículo 429.1 *ibídem* que dispone que, “de no haber acuerdo entre las partes para finalizar el litigio ni existiera conformidad sobre los hechos, la audiencia proseguirá para la proposición y admisión de pruebas”.

Partiendo del hecho de que la finalidad de la prueba es producir convicción en el juez, su forma de proposición requiere la debida aplicación de una estructura concreta y ordenada de las pruebas a solicitarse. De acuerdo a nuestro Código de Procedimiento Civil “las pruebas deben concretarse al asunto que se litiga y a los hechos sometidos al juicio”; y, “sólo la prueba debidamente actuada, esto es aquella que se ha pedido, presentado y practicado de acuerdo con la ley, hace fe en juicio”.

A lo largo de esta fase rige el principio de aportación de las partes, que son las que otorgan al juzgador el material de hecho necesario para llegar a la sentencia definitiva. Principio que se materializa en el sentido de que las partes no sólo fijan cuáles van a ser las cuestiones sobre las que se solicita se abra la causa a prueba, sino también los medios a utilizar para ello, señalándose el contenido del objeto de la actividad probatoria y los medios concretos para la prueba.

Una vez finalizada la fase de proposición de las pruebas, se lleva a cabo lo que es la admisión o, en su defecto, la inadmisión de los medios propuestos, así como el examen de la pertinencia del medio probatorio aportado.

La admisibilidad de la prueba debe ser examinada por el juez en el momento inicial de la actividad probatoria, esto es, cuando provee, ordenando o repeliendo las fuentes propuestas. “Y se refiere a las condiciones que debe reunir la probanza para que sea posible su ingreso al proceso, cuales son el ofrecimiento oportuno, y la licitud tanto de la prueba en sí como del modo en que ha sido adquirida u obtenida”⁷.

La pertinencia en materia de prueba equivale a lo que la congruencia representa como exigencia de correspondencia entre la pretensión y la decisión: “las pruebas deben guardar relación con la cuestión sometida a proceso, vale decir, debe ceñirse a las afirmaciones

⁷ MIDÓN, Marcelo S. obra citada, pág. 38.

contradichas por las partes, y a los hechos sobrevinientes que consoliden o extingan la relación procesal”⁸.

De esta manera la fase probatoria empieza a desarrollarse, pudiendo el juez aportar pruebas de oficio o inadmitir pruebas irrelevantes a la causa, con el fin de, posteriormente, elaborar una valoración adecuada de las pruebas aportadas, que se traduce, en palabras de Devis Echandía, “en que la valoración o apreciación de la prueba judicial es aquella operación que tiene como fin conocer el mérito o valor conviccional que pueda deducirse de su contenido. Se trata de una actividad procesal exclusiva del juez. Es el momento culminante y decisivo de la actividad probatoria”⁹.

Siendo la Constitución de la República la norma Suprema de nuestro sistema jurídico, debemos analizar los preceptos y garantías que dicha norma dispone en el tema referente a la actividad probatoria; iniciando por el concepto de la motivación y desglosando los aspectos más trascendentales de la garantía del debido proceso.

El ejercicio de la función de juzgar impone como deber trascendental el de fallar, ajustándose a los mandatos constitucionales que imponen como garantía fundamental la debida motivación del fallo. Tal deber se encuentra consagrado en la Constitución de la República vigente en el artículo 76, numeral 7, literal 1): “Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. **Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados.**”

Este deber de motivar la sentencia guarda estrecha relación no sólo con la mención que se haga de la norma jurídica, sino además con el material fáctico, debiéndose indicar en el fallo o sentencia los medios probatorios en virtud de los cuales se determinó la existencia,

⁸ MIDÓN, Marcelo S. obra citada, pág. 38-39.

⁹ DEVIS E., Hernando, obra citada.

inexistencia o circunstancias de los hechos invocados en la demanda, o por la defensa dentro del proceso.

Etimológicamente, “el vocablo prueba, deriva del latín *probus*, que significa bueno, honrado, de tal manera que lo que resulta probado es bueno, es correcto, es auténtico”¹⁰.

Sin embargo, en sentido procesal, la prueba es un medio de verificación de las proposiciones que los litigantes formulan durante el juicio, dada la necesidad procesal del juez de comprobar la verdad o falsedad de ellas, con el objeto de formar su convicción o convencimiento.

Eduardo Couture, define al debido proceso como “la posibilidad de argumentar, probar y recurrir”¹¹, por lo que, es evidente que la sentencia debe poner de manifiesto el razonamiento judicial, en virtud del cual fue posible arribar a la conclusión, es decir al fallo.

A pesar de que el sistema oral no se aplica actualmente en nuestro Sistema Procesal Civil, la importancia de la actividad probatoria nace de la incertidumbre del juez con respecto a los hechos afirmados tanto en la demanda por parte del actor, como aquellos invocados y negados por el defendido en su contestación; siendo una necesidad el probar los hechos que constituirán la base del pronunciamiento judicial, a través de la regulación y debida utilización de los distintos medios de prueba, delimitando las situaciones jurídicas de las partes, lo cual constituye un interés público y general del Estado, cuyo fin último será el garantizar el debido proceso y velar por el cumplimiento de los principios de celeridad y eficiencia, entre otros.

En lo referente a la potestad de los jueces para ordenar pruebas de oficio a excepción de la prueba de testigos, el artículo 118 del Código de Procedimiento Civil estipula lo siguiente: “Los jueces pueden ordenar de oficio las pruebas que juzguen necesarias para el esclarecimiento de la verdad, en cualquier estado de la causa, antes de la sentencia. Exceptúase la prueba de testigos, que no puede ordenarse de oficio; pero si podrá el juez

¹⁰ SENTÍS MELENDO, Santiago, “La Prueba”, Buenos Aires, 1978, pág. 35.

¹¹ COUTURE, Eduardo, “Estudios de Derecho Procesal Civil”, obra citada.

repreguntar o pedir explicaciones a los testigos que ya hubiesen declarado legalmente. Esta facultad se ejercerá en todas las instancias antes de la sentencia o auto definitivo, sea cual fuere la naturaleza de la causa”.

La norma antes citada hace una clara referencia a la actividad de dirección del proceso por parte del juez, a quien se le otorga la facultad para exigir que la prueba se produzca de oficio, por medios probatorios determinados por el mismo juzgador. Sin embargo, su iniciativa probatoria debe estar condicionada a un adecuado manejo del concepto de prueba y lo que ella significa dentro del proceso, a fin de no abusar de las medidas y facultades que la ley ha puesto en sus manos.

Un aspecto muy importante dentro de este adecuado manejo de la iniciativa probatoria otorgada al juez, es aquel de aclarar que dicha facultad debe estar dirigida a la verificación de las afirmaciones realizadas por las partes y no a la averiguación por cuenta propia de hechos que no hayan sido alegados por éstas; tomando en cuenta que las partes han fijado a través de su demanda y contestación los hechos controvertidos, sin que el juez pueda ir más allá de esos hechos o afirmaciones, es decir, sin que de ninguna manera incurra en lo conocido como extra y ultra petita al momento de configurar su criterio.

Debe aclararse que esta facultad del juez de solicitar pruebas de oficio se da principalmente al momento en el que, previo a emitir sentencia, valora la prueba aportada por las partes y obtiene un resultado poco convincente. De ninguna manera y bajo ninguna circunstancia el juez ordenará pruebas de oficio sin antes haber valorado cada una de las pruebas presentadas.

El poseer la libertad para ordenar pruebas de oficio el número de veces que sean necesarias es un acontecimiento visto por muchos como un motivo de retraso procesal, sin embargo, no podemos olvidar que una sentencia justa para todas las partes intervinientes, no es sino el resultado de la total y completa seguridad y convencimiento del juez.

Con tales antecedentes podemos afirmar que la sugerencia probatoria de oficio constituye la libertad, tanto laboral como ideológica del juez, para intervenir en la etapa probatoria y solicitar las pruebas que a su criterio sean pertinentes para la óptima resolución de la causa,

sin que en ningún momento el principio de imparcialidad respecto a las partes se vea afectado y toda vez que su objetivo esté encaminado a la aclaración de inconsistencias y dudas y no a la demora innecesaria de la sentencia final.

La delimitación de los poderes procesales del juez en relación a cada una de las partes, se refleja durante la etapa de prueba, la misma que se regirá por el carácter contradictorio del proceso y del principio dispositivo que lo engloba, haciendo referencia a que dicho principio se aplica como consecuencia del impulso procesal, que puede corresponder también en mayor o menor medida, al juez.

Ahora, entendiendo que la sentencia es el resultado directo de la actuación de las partes procesales en la fase probatoria, es conveniente mencionar algunos de los principios empleados por el juez a lo largo de la aportación de pruebas, es decir, explicar en qué consiste la intención judicial y cómo se rige, los principales son:

Principio de la unidad de la prueba que establece que el conjunto probatorio del proceso forma una unidad, y como tal “debe ser examinado y apreciado por el juez, para confrontar diversos medios, puntualizar su conducencia o discordancia y concluir con el convencimiento que de ellos se forme”¹².

Principio de inmediación, que rige, o por lo menos, debería regir permanentemente el principio de inmediación, es decir, la presencia y vínculo directo del juez en todo momento de la litis, en especial, durante el momento probatorio para garantizar su total e imparcial conocimiento de la causa.

Principio de naturalidad de la prueba, entendiéndose por éste a la completa oposición respecto a la práctica de procedimientos ilícitos para la obtención de la prueba, principio que se verá garantizado mientras la inmediación del juez le permita apreciar directamente las características de cada prueba aportada.

¹² CABRERA A., Benigno H., obra citada, pág. 364.

Finalmente tenemos al principio de contradicción de las partes que, como no puede darse de otra manera dentro de un sistema dispositivo, es consecuencia de la audiencia bilateral de las partes en la que se consagra el respaldo procesal de conocer, discutir y oponerse a una prueba.

En lo concerniente a la reforma oral del derecho procesal civil ecuatoriano, es posible advertir la poca atención destinada a esta rama del Derecho por parte de los legisladores de aquel entonces y por los actuales Asambleístas, debiendo haber sido, desde mi punto de vista, el primer objetivo de la reforma oral; tanto más que el Código de Procedimiento Civil es el cuerpo legal que suple los vacíos de las otras materias.

Actualmente, como consecuencia de la institución de plenos poderes a una Asamblea Nacional, varios organismos técnicos y grupos colegiados han puesto a consideración de esta nueva función legisladora, proyectos sumamente interesantes que merecen ser estudiados y evaluados en búsqueda de una nueva y más moderna normativa civil.

Uno de los ejemplos más sobresalientes es el Proyecto del Código de Procedimiento Civil elaborado por el Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal (IEDP), mismo que logra capturar la esencia del concepto de oralidad y propone nuevos mecanismos y alternativas para un más eficiente proveer y proceder.

Como acertadamente manifiesta Hernando Devis Echandía: "...en lo oral la concentración e intermediación operan de manera perfecta, el juez adquiere una mayor capacidad para juzgar, en razón del conocimiento y apreciación directa que hace de las personas y hechos sometidos a su examen, y dispone, de una mayor actividad y más amplias facultades..."¹³.

Las principales directrices o postulados que rigen a la oralidad dentro del proceso son:

Concentración de la sustanciación del pleito, de ser posible en un único período que vendría a ser el debate propiamente tal, junto con la celebración de una o unas pocas

¹³ DEVIS ECHANDÍA, Hernando, "Teoría General del Proceso", Buenos Aires, Ed. Universidad, 1997, pág. 69.

audiencias que abarquen a los incidentes que deben ser resueltos conjuntamente con la cuestión principal.

Identidad física del órgano jurisdiccional, es decir que el juez debe ser la misma persona desde la iniciación del juicio hasta el pronunciamiento de la sentencia, procurando evitar que su ausencia sea una causa de dilación del fallo.

Inmediatividad en la relación entre el juzgador y las personas cuyos testimonios tiene que apreciar y valorar, lo que significa que las pruebas, sin excepción alguna, jamás deberán rendirse ante un juez delegado o suplente que obstruya la objetividad del criterio del juez principal de la causa.

Autoridad suficiente del juez en la dirección del proceso, mismo que no sólo se encamina a la satisfacción de intereses particulares, sino también al aseguramiento de los fines estatales que, en toda democracia, deben aspirar a la realización de una justicia social.

Completa apertura y publicidad de las audiencias, obviamente menos de aquellas excluidas por mandato de la ley, Así mismo, podemos establecer que la implementación del sistema oral permitirá una mejor apreciación y valoración de las pruebas, considerando que el juez siempre las recibirá de forma directa, obteniendo un mayor número de elementos de convicción sin que exista la obstrucción producida por trámites innecesarios y la intervención de terceros ajenos al proceso, logrando contribuir a una mayor efectividad del proceso.

Contamos también con la eliminación de solemnidades y formalismos que no desempeñan ningún papel importante en el desarrollo de la causa, acarreando una economía procesal que logra que las partes confíen aún más en la oportuna y razonada resolución de la controversia al no verse detenidas por el tan característico papeleo de toda burocracia.

Las cargas probatorias dinámicas pueden, y en realidad, deben ser utilizadas por los estrados judiciales en determinadas situaciones en las que no funcionan adecuadamente las previsiones legales que, como norma reparten esfuerzos probatorios.

La implementación de esta teoría implica un desplazamiento del *onus probandi*, según fueren las circunstancias del caso, en cuyo mérito aquél puede recaer en cabeza de quien esté en mejores condiciones técnicas, profesionales o fácticas para producirlas, más allá del emplazamiento como actor o demandado o de tratarse de hechos constitutivos, impeditivos, modificativos o extintivos.

Es debido a esta omisión de tecnicidades que a la doctrina de las cargas probatorias dinámicas se la conoce también como principio de solidaridad o de efectiva colaboración de las partes con el órgano jurisdiccional en el proceso de recolección de material de convicción, sin importar el título o características de las partes procesales que, en definitiva, sólo limitan la facultad de aportar pruebas convenientes a la resolución de la causa.

Sin embargo, es necesario destacar que la aplicación de dicha teoría sólo procede *in extremis*, es decir, en los casos en los que la norma que regula la aportación de pruebas al juicio no logra satisfacer las expectativas del juez, generando conflictos y consecuencias inicuas al momento de fallar.